



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, funge como Secretaria General de Acuerdos de esta Sala.- Conste.-

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: ****

ACTOR: ****

AUTORIDAD DEMANDADA: "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. DE C.V.

TERCERA INTERESADA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver los autos del juicio de nulidad número **** y:

RESULTANDO:

I. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, **** demandó de la concesionaria "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. de C.V., la nulidad del acto administrativo que se precisó en el segundo párrafo del escrito de demanda, el que en el auto de admisión de demanda literalmente se asentó como sigue:

"II. ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA:

*La resolución definitiva de los periodos facturados en el recibo número **** de la cuenta **** emitidos por Proactiva Medio Ambiente CAASA S.A. DE C.V. Aguascalientes, en la que determino que el suscrito debería de pagar la cantidad de \$4,873.00 (CUATRO MIL OCHOCEINTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)".*

II. El *once de diciembre de dos mil dieciocho*, fue admitida a trámite la demanda presentada, se tuvieron por ofertadas las pruebas señaladas por la parte actora, se ordenó emplazar a la concesionaria demandada y se reconoció el carácter de tercera interesada Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [CCAPAMA] llamándosele a juicio.

III. Mediante proveído de fecha *veintinueve de enero de dos mil dieciocho* se tuvo a la tercera interesada Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [CCAPAMA] contestando la demanda entablada en contra.

IV. En cuanto a la concesionaria "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. de C.V., se le tuvo por no contestando la demanda entablada en su contra, según se advierte de proveído de fecha *quince de marzo de dos mil dieciocho*, señalándose fecha para la audiencia de juicio.

V. En fecha *dos de abril de dos mil dieciocho* se celebró la audiencia de juicio, en la cual fueron oídas las pruebas ofertadas por las partes, se abrió el periodo de alegatos y una vez agotado, se citó el asunto para sentencia definitiva, la que hoy se dicta bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A, y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que se impugna una resolución administrativa emitida por la



concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

SEGUNDO. La existencia del acto **administrativo impugnado**, se acredita con el recibo número **** emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el *diez de noviembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *cinco* de los autos. Determinación en la que se exige el pago de la cantidad de \$4,873.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por 24 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la ****, de esta ciudad de Aguascalientes, registrado con la cuenta ****, siendo el último mes facturado el mes de octubre de dos mil diecisiete (M-10-2017).

Probanza que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

TERCERO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

En virtud de que no acredita ninguna causal de improcedencia que ésta Sala advierta de oficio, lo procedente es estudiar los conceptos de nulidad hechos valer por la parte accionante, y que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y

fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

CUARTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.

Ahora bien, por cuestión de orden se entra al estudio del **PRIMERO** de los conceptos de nulidad hechos valer por la parte actora, además de ser el que mayor beneficio le brinda, aplicándose por analogía la tesis jurisprudencial, de la novena época, sustentada por el **PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa; Tesis: XVI.1o.A.T. J/9: Página: 1275, de rubro y texto:

“CONCEPTOS DE ANULACION EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES REFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que **el Tribunal** de lo Contencioso Administrativo del Estado **se encuentra constreñido a ocuparse** de todos los motivos de



*impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del actor, y **preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra.***

Lo **FUNDADO** del concepto en estudio lo es porque de una interpretación sistemática e integral de los artículos 3°, fracción XIII, 23, 25, fracción II, 27, fracción I, 29, fracción III, 34, fracción IV y 101 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; 3, 6, fracción XII, y 16, fracción III, del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se obtiene que:

1. El prestador de los servicios, en este caso, la concesionaria PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. de C.V., **aplicará para los cobros de los servicios** de agua potable, alcantarillado y saneamiento, **las cuotas y tarifas** que al respecto autorice el Consejo Directivo del organismo operador municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes —CCAPAMA—.

2. Cuotas y tarifas, que para su eficacia el Director General del citado organismo operador municipal, **deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad.**

Luego, la concesionaria Proactiva Medio Ambiente para determinar la cantidad a pagar por parte de los usuarios, necesariamente deberá tener como base las tarifas y cuotas autorizadas y publicitadas en los términos que lo exige la norma; circunstancia que en la especie no acontece.

Se hace tal afirmación, porque la concesionaria **no demostró** que las tarifas aplicables a los meses facturados en el recibo impugnado **se hayan publicado en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en el Estado,** toda vez que no exhibió prueba alguna para tener por acreditado que se hubieren publicado dichas tarifas.

Ahora bien, se dice que no demostró que las tarifas aplicables a los meses facturados se hayan publicado, ya que dentro de la clasificación de los actos se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. De manera que para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.

En este caso, el acto negativo que se le atribuye a la concesionaria, versa exclusivamente en que basa su resolución en tarifas que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en la entidad; de manera que, a fin de desvirtuar el hecho negativo que se le atribuye, estaba obligada a exhibir la publicación de todas las cuotas o tarifas que sirvieron de base para la determinación del monto a pagar por parte del usuario.

Esto, porque la negativa simple de los actos por parte del actor, la libera de la necesidad de probarlos, pues lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado, de tal suerte que la carga de probar recae en la concesionaria, porque la determinación del adeudo es un hecho que se le imputa de manera directa, por ser ella la facultada para aplicar las cuotas o tarifas legalmente válidas; de lo que se sigue que, estaba obligada conforme al artículo 35, primer párrafo, *in fine*, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de



Aguascalientes, no solo a contestar ese hecho, sino a probar la razón de su respuesta, sin que en el caso así lo hubiere hecho, ya que **no exhibió constancia alguna para acreditar que se hubieren publicado las tarifas en cuestión.**

Da sustento a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/45, de la novena época, localizable con número de registro: 168192, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dice:

“CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBRÉN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA. El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia.”

También, es aplicable la tesis aislada 4.1o.230 K, de la octava época, con número de registro: 208122, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las

responsables”.

Al no haber demostrado la concesionaria demandada que las tarifas o cuotas que tomó como base para determinar la cantidad a pagar por parte del usuario se hubiesen publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado así como en un periódico de mayor circulación en la entidad, talo y como lo exige la norma, aunado a que no dio contestación a la demanda entablada en su contra, lo que procede es declarar la **nulidad lisa y llana** del acto impugnado.

QUINTO. Al ser FUNDADO el concepto de nulidad PRIMERO del escrito de demanda, según lo asentado en el considerando anterior, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, por lo que con fundamento en el diverso numeral 62, fracción I, de ese mismo cuerpo de leyes, se declara la **NULIDAD LISA Y LLANA** de la determinación contenida en el recibo número **** emitido por la concesionaria “Proactiva Medio Ambiente C.A.S.A”, S.A. de C.V., el *diez de noviembre de dos mil diecisiete*, visible a foja cinco de los autos.

Determinación en la que se exige el pago de la cantidad de \$4,873.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por 24 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en la ****, de esta ciudad de Aguascalientes, registrado con la cuenta ****, siendo el último mes facturado el mes de octubre de dos mil diecisiete (M-10-2017).

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II, y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso



Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente la acción intentada por la parte actora.

SEGUNDO. Se declara la **NULIDAD LISA Y LLANA** de la determinación contenida en el recibo número **** emitido por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el *diez de noviembre de dos mil diecisiete*, visible a foja *cinco* de los autos.

TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los MAGISTRADOS ENRIQUE FRANCO MUÑOZ, RIGOBERTO ALONSO DELGADO y ALFONSO ROMÁN QUIROZ, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Conste.-

**

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES:

CERTIFICA

Que la presente impresión contenida en **nueve** páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número ********, promovido por ******** en contra de **PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA y COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los **veinticinco días del mes de mayo de dos mil dieciocho**.- Doy fe.-

**LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES